

## • • Los trabajadores y la democracia progresista

Por Eduardo Mernies

(Artículo publicado en El Popular el 05/03/2010)

En estos tiempos de reafirmación de la tendencia de buena parte de los países de América Latina, hacia modelos económicos y políticos que priorizan al ser humano por encima del mercado, nos importa destacar la renovación del respaldo ciudadano hacia la opción de cambios propuesta en el Uruguay por el Frente Amplio, en primera instancia con la presidencia del Cro. Tabaré Vázquez, y ahora con la presidencia del Cro. José Mujica.

Para quienes creemos en un proceso de acumulación de fuerzas, como estrategia para la unificación y consolidación de las grandes mayorías nacionales y populares, la unidad de la izquierda, así como de las organizaciones sociales representativas del pueblo (trabajadores, estudiantes, cooperativistas), alineadas tras un objetivo común, resulta esencial.

Nos parece impensable un proyecto de país progresista sin la participación de sindicatos y gremios.

La conciencia política y de clase nos lleva, entre otras cosas, a la convicción de que el proceso de cambios hacia una sociedad más justa, solidaria e igualitaria, necesariamente se apoya en una democracia sólida. Tan así es, que la medida más contundente y significativa que marcó históricamente el repudio a la dictadura militar fue, sin lugar a dudas, la huelga general de la entonces CNT, con un amplísimo respaldo de los trabajadores organizados, aislando al fascismo de todo respaldo popular. Tan así es que, más allá del núcleo de dirigentes (fundamentalmente comunistas, tupamaros, del PVP), la inmensa mayoría de los perseguidos de la dictadura fueron trabajadores y estudiantes (en general identificados con sus gremios), militantes gremiales. Y es bueno destacar esto, porque nunca está de más reconocer y destacar el rol de las organizaciones populares en la resistencia a la dictadura y en la lucha por la recuperación de la democracia.

Cuando se eleva el nivel de conciencia, generalmente a través de la lucha y de la discusión, parte de lo que aprendemos los trabajadores es a tener un norte, un objetivo esencial. Cada uno con su ideología “buena o mala, pero mía”, tenemos seguramente en común la búsqueda de un sistema económico y político más justo, donde la distribución de la riqueza sea más justa, valorizando el aporte de los trabajadores en el proceso productivo y de generación de tal riqueza.

Pero el trabajo no es solamente generación de bienes económicamente medibles, sino también de servicios. Por un lado se requiere empresas públicas eficientes y satisfacción del cliente; por otro está la educación, generadora de seres humanos libre pensantes, de hombres y mujeres capaces de obtener trabajos con salarios dignos; y también está la salud como un servicio esencial a la sociedad, que lejos de descuidarse, requiere ser fortalecido.

Todos ellos, requieren recursos materiales y humanos. Y la buena parte que está en la órbita estatal, debe ser cuidada y provista de los recursos que se necesiten para atender sus fines.

Como militantes políticos, pero sin olvidar nuestro compromiso y formación en la lucha sindical, no podemos obviar el concepto de explotación (contra la cual luchamos), y ella se agudiza cuando la plusvalía aumenta, cuando proporcionalmente disminuye la cuota parte que toca al trabajador de la riqueza que genera con su esfuerzo.

De acuerdo a los conceptos expuestos, estamos convencidos que las empresas públicas (al igual que cualquier otra) deben contar con la dotación adecuada de funcionarios, donde el trabajo reciba cada vez más cuota parte de la riqueza que genera.

En relación a los servicios que brinda el Estado, acordes al respeto a los derechos básicos, de salud, educación, acceso al trabajo, etc., parece esencial determinar primero las necesidades reales de personal, para luego buscar la forma más justa y transparente de cubrirlas. En particular, la salud, en lo que tiene que ver por ejemplo con la atención de las emergencias y las policlínicas, es prioritario contar con los funcionarios que se necesiten. Respecto a la educación, hasta por una cuestión de dedicación, atención personalizada, y limitación humana, e inclusive vinculado a cuestiones de seguridad pública, la cantidad de alumnos por clase debe ser ajustada, por tanto la asignación de docentes debe ser proporcional, es decir, menos alumnos por aula, más profesores o maestros. Son políticas de Estado.

Lejos del abandono de las empresas públicas y administración central, se debe continuar con el proceso de ingresos por concursos, pero con un mecanismo que procure la mayor cristalinidad y justicia en los mecanismos de selección.

Estamos convencidos que el proceso de profundización de los cambios, contará siempre con las organizaciones sociales representativas, las cuales requieren su espacio para participar y opinar.

\* **Eduardo Mernies** (Integrante del Comité Ejecutivo del Frente Izquierda de Liberación)

